OPOSICIÓN POLICIA LOCAL
PRIMER EJERCICIO. 25-03-2023

1.- La figura del «habeas corpus», según la Constitución Española de 1978 (CE):

a) Producirá la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida.

b) Producirá la inmediata puesta a disposición administrativa de toda persona detenida.

c) Será regulada a través de un Decreto emanado del Poder Judicial.

d) Ninguna de las tres afirmaciones anteriores es correcta.

2.- El art. 92 CE prevé que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos cuya convocatoria:

a) Corresponderá al Rey.

b) Corresponderá al Presidente del Gobierno.

c) Corresponderá al Presidente del Congreso de los Diputados.

d) Corresponderá al Presidente de las Cortes Generales.

3.- El art. 108 de la Constitución Española de 1978 prevé que:

a) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante las Cortes Generales.

b) El Gobierno responde mancomunadamente en su gestión política ante las Cortes Generales.

c) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

d) El Gobierno responde mancomunadamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

4.- Velar por la independencia de los Tribunales es una atribución que, según la CE, corresponde:

a) Al Rey.

b) Al Consejo General del Poder Judicial.

c) Al Ministerio Fiscal.

d) Al Ministro de Justicia.

5.- El Estatuto de Autonomía de Cantabria, en su art. 24, establece que la Comunidad Autónoma, en los términos dispuestos en la Constitución, tiene competencia exclusiva en materia de:

a) Los ferrocarriles que discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma.

b) Puertos, aeropuertos y helipuertos de interés general.

c) Las obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma que se realicen dentro de su propio territorio, aunque afecten a otra Comunidad Autónoma.

d) La pesca en aguas interiores.

6.- El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo:

a) De exigencia obligatoria en todas las Entidades Locales.

b) De exigencia obligatoria en todas las Entidades Locales que así lo decidan.

c) De exigencia potestativa en todas las Entidades Locales.

d) Ninguna de las tres afirmaciones anteriores es cierta.

7.- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas establece que el personal al que dicha Ley se refiere:

a) No podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.

b) No podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de una actividad mercantil o industrial, pero sí profesional.

c) No podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de una actividad industrial o profesional, pero sí mercantil.

d) Deberá invocar o hacer uso, para general conocimiento, de su condición pública en el desarrollo de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional.

8.- De la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se deduce que quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de citada Ley:

a) La dirección de seminarios en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado.

b) El dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado.

c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.

d) Los tres supuestos anteriores están exceptuados del régimen de incompatibilidades.

9.- En los municipios a los que se refiere el Título X de la Ley 7/985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), aprobar la oferta de empleo público corresponde:

a) A la Alcaldía.

b) A la Concejalía.

c) A la Junta de Gobierno Local.

d) Al Pleno.

10.- Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia:

a) Sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

b) Con una prestación de servicios previos de dos años y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

c) Sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y siendo exigible un plazo de permanencia en la misma de dos años como mínimo.

d) Con una prestación de servicios previos de dos años y siendo exigible un plazo de permanencia en la misma de dos años como mínimo.

11.- De las siguientes, cuál es una actuación administrativa de fomento:

a) Subvención.

b) Autorización.

c) Contratación.

d) Comunicación previa.

12.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general, está previsto que pueda interponerse:

a) Recurso de alzada o de reposición.

b) Ni recurso de alzada ni de reposición.

c) Recurso de alzada o de reposición, dependiendo de si la disposición en cuestión procede de un órgano cuyos actos agotan la vía administrativa.

d) Ninguna de las tres respuestas afirmaciones anteriores es cierta.

13.- En relación a los bienes comunales, es cierto que:

a) Su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.

b) Son bienes patrimoniales.

c) Podrán pertenecer, únicamente, a Entidades locales menores.

d) Ninguna de las tres afirmaciones anteriores es correcta.

14.- La LRBRL establece que la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal de los Municipios a los que se refiere el Título X de dicha Ley:

a) Requiere el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes de la corporación.

b) Requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la corporación.

c) Requiere el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la corporación.

d) Requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

15.- En lo que a la responsabilidad patrimonial se refiere, es cierto que:

a) No es posible exigir responsabilidad patrimonial, en vía administrativa, sólo judicial, por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública.

b) Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

c) Los particulares exigirán las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública a dichas autoridades y personal.

d) Los particulares podrán exigir a la Administración Pública o a las autoridades y personal a su servicio, las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

16.- A tenor del art. 20 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP), está exento de responsabilidad criminal:

a) El que obre impulsado por miedo.

b) El que, al tiempo de cometer la infracción penal, padezca un trastorno mental transitorio.

c) El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

d) En los tres supuestos anteriores hay exención de responsabilidad penal.

17.- ¿Es cierto que el error sobre un hecho constitutivo de la infracción penal, según el art. 14 CP, excluye la responsabilidad criminal?:

a) Depende.

b) Sí.

c) No.

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es cierta.

18.- Se consideran también autores del delito (art. 28 CP):

a) Los que inducen a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

c) Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

d) Tanto los que inducen como los que cooperan.

19.- La circunstancia de prevalerse del carácter público que tenga el culpable del delito es, de acuerdo con los arts. 21 a 23 CP:

a) Una atenuante.

b) Una agravante.

c) Una atenuante o una agravante, dependiendo de las circunstancias concurrentes.

d) Ni una atenuante ni una agravante.

20.- El art. 437 CP establece que la autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado:

a) Con las penas de multa de diez a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.

b) Con las penas de multa de diez a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

c) Con las penas de multa de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.

d) Con las penas de multa de seis meses a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de diez meses a dos años.

21.- En la estructura del CP, el delito consistente en que una autoridad o funcionario público, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, se encuadra dentro del Título dedicado a:

a) Los delitos contra la Administración de Justicia.

b) Los delitos contra la Administración Pública.

c) Los delitos contra la Constitución.

d) Los delitos contra las Instituciones del Estado.

22.- La privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotor es:

a) Una de las penas recogidas en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial.

b) Una de las penas recogidas en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial, pero referida, exclusivamente, a supuestos en los que la conducción se haya producido bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas.

c) Una de las penas recogidas en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial, pero referida, exclusivamente, a supuestos en los que la conducción se repute manifiestamente temeraria.

d) Nunca podrá imponerse cuando la persona culpable del delito tenga, como medio de vida, actividades relacionadas con la conducción.

23.- Cuando el CP define como conducta delictiva la de quien, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, se está refiriendo al delito de:

a) Amenazas.

b) Estafa.

c) Extorsión.

d) Suplantación

24.- Según el art. 167 CP, la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en el Capítulo I ("De las detenciones ilegales y secuestros") del Título VI ("Delitos contra la libertad") del CP:

a) Gozará de la aplicación de atenuante por su carácter de autoridad, con aplicación de las penas previstas, respectivamente, en su mitad inferior.

b) Será castigado con las penas respectivamente previstas, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

c) Será castigado con las penas respectivamente previstas, en su mitad superior, sin llegar a la superior en grado.

d) No existe previsión específica para autoridades o funcionarios en estos casos.

25.- Para entrar en un domicilio, el art. 545 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, establece que:

a) A diferencia de lo que sucede con los españoles, en el caso de extranjeros residentes en España, no será necesario, en ningún caso, su consentimiento.

b) Al igual de lo que sucede con los españoles, en el caso de extranjeros residentes en España, no será necesario, en ningún caso, su consentimiento.

c) Con carácter excepcional, será necesario el consentimiento tanto de españoles como de extranjeros residentes en España.

d) Con carácter general, será necesario el consentimiento tanto de españoles como de extranjeros residentes en España.

26.- El procedimiento abreviado, según lo establecido mediante la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y modificación del procedimiento abreviado, se aplicará, sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, se aplicará:

a) Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años.

b) Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a diez años.

c) Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a once años.

d) Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a doce años.

27.- Según el art. 24 de la Ley de Cantabria 5/1997, de 6 de octubre, de Prevención, Asistencia e Incorporación Social en Materia de Drogodependencias, ¿los menores de 18 años tienen prohibida la entrada en discotecas, salas de fiesta y establecimientos similares?:

a) Sí.

b) Sí, pero, excepcionalmente, podrán acceder si son acompañados de una persona mayor de edad.

c) No.

d) Depende.

28.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo Séptimo afirma que la Guardia Civil tendrá la consideración de fuerza armada:

a) En el cumplimiento de las misiones de carácter civil que se le encomienden, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

b) En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

c) En el cumplimiento de las misiones de carácter civil y militar que se le encomienden, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

d) En ningún caso.

29.- La Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, y el Decreto 1/2003, de 9 de enero, por el que se aprueban las Normas-marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria, han sido derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 9/2022, de 27 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria:

a) A excepción de los arts. 8.3 de la Ley y 82 del Decreto citados, que mantendrán su vigencia durante el plazo de un año a partir de la publicación de la Ley 9/2022, de 27 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria.

b) A excepción de los arts. 8.3 de la Ley y 82 del Decreto citados, que mantendrán su vigencia durante el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2022, de 27 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria.

c) A excepción de los arts. 82 de la Ley y 8.3 del Decreto citados, que mantendrán su vigencia durante el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2022, de 27 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria.

d) A excepción de los arts. 82 de la Ley y 8.3 del Decreto citados, que mantendrán su vigencia durante el plazo de un año a partir de la publicación de la Ley 9/2022, de 27 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria.

30.- Según el art. 9 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, el Documento Nacional de Identidad es obligatorio:

a) A partir de la inscripción en el Registro Civil.

b) A partir de los catorce años.

c) A partir de los dieciséis años.

d) A partir de los dieciocho años.

31.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo para su vida.

b) Deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo para su integridad física.

c) Deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo para la vida o la integridad física de terceras personas.

d) El uso de las armas deberá regirse por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

32.- La Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, determina, en su art. 28, el horario del período de verano, se aplicará:

a) Exclusivamente, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

b) Exclusivamente, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.

c) Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, fiestas de carnaval (fijadas por cada Municipio), Semana Santa (en el período comprendido entre el Domingo de Ramos y el Lunes de Pascua, ambos inclusive) y festividades de la Navidad (que comprenderán desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos inclusive).

d) Los viernes, sábados y víspera de festivo.

33.- En ejercicio de la competencia exclusiva atribuida por su Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de competencia, se ha dictado:

a) La Ley 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.

b) La Ley 1/2012, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.

c) La Ley 1/2022, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.

d) No se ha dictado norma legal, sino únicamente a nivel de Decreto.

34.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece, en su art. 22, que:

a) Con carácter general, los datos captados a través de sistemas de cámaras o videocámaras serán suprimidos en el plazo máximo de quince días desde su captación.

b) Con carácter general, los datos captados a través de sistemas de cámaras o videocámaras serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación.

c) Con carácter general, los datos captados a través de sistemas de cámaras o videocámaras serán suprimidos en el plazo máximo de dos meses desde su captación.

d) Con carácter general, los datos captados a través de sistemas de cámaras o videocámaras serán suprimidos en el plazo máximo de tres meses desde su captación.

35.- En particular, será autoridad competente, a los efectos de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, en el ámbito de sus respectivas competencias:

a) Exclusivamente las Fuerzas Cuerpos de Seguridad.

b) Exclusivamente las Administraciones Penitenciarias.

c) Exclusivamente, el Ministerio Fiscal.

d) Ninguna de las tres afirmaciones anteriores es cierta.

36.- La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, determina que las instalaciones fijas de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las Corporaciones Locales serán autorizadas por:

a) El Alcalde.

b) El Presidente de la Comunidad Autónoma.

c) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

d) El Tribunal Superior de Justicia de la respectiva Comunidad Autónoma.

37.- A los efectos del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y de sus disposiciones complementarias, los conceptos básicos sobre vehículos, vías públicas y usuarios de las mismas son los previstos en:

a) Su anexo Preliminar.

b) Su anexo I.

c) Su anexo II.

d) Su anexo VIII.

38.- Los requisitos técnicos para la homologación de vehículos dotados de un sistema de conducción automatizado corresponde:

a) A la Dirección General de Tráfico.

b) Al Ministerio del Interior.

c) Al Ministerio competente en materia de innovación.

d) Al Ministerio competente en materia de industria.

39.- De acuerdo con el art. 37 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, queda prohibido adelantar:

a) En los pasos a nivel y en sus proximidades.

b) En las intersecciones y en sus proximidades.

b) En las curvas y cambios de rasante.

d) En todos los lugares a los que se refieren las tres letras anteriores.

40.- La forma, color, diseño y significado de las señales de circulación, así como las dimensiones de las mismas en función de cada tipo de vía y sus sistemas de colocación se especificarán en:

a) El Catálogo Oficial de Señales de la Circulación y Marcas Viales.

b) La Nomenclatura Oficial de Señales de la Circulación y Marcas Viales.

c) El Inventario Oficial de Señales de la Circulación y Marcas Viales.

d) El Repertorio Oficial de Señales de la Circulación y Marcas Viales.

41.- El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, indica que el titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la pérdida parcial de puntos pasará a tener un crédito de doce puntos:

a) Transcurridos seis meses sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos.

b) Transcurrido un año sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos.

c) Transcurridos dieciocho meses sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos.

d) Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos.

42.- El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, en las condiciones fijadas legalmente, realizando y superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial:

a) Cuya duración será como máximo de quince horas.

b) Cuya duración será de quince horas.

c) Cuya duración será como máximo de treinta horas.

d) Cuya duración será de treinta horas.

43.- El Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en su art. 55 ("Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos"), determina que las infracciones a dicho precepto:

a) Tendrán carácter leve.

b) Tendrán carácter grave.

c) Tendrán carácter muy grave.

d) Podrán tener carácter leve, grave o muy grave.

44.- Se contará con un mínimo de dos médicos, dos socorristas y dos ambulancias, añadiéndose, como mínimo, una ambulancia por cada fracción suplementaria de 1.000 participantes, en pruebas deportivas cuya participación supere:

a) Los 250 participantes.

b) Los 500 participantes.

c) Los 750 participantes.

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es cierta.

45.- En aplicación del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, para obtener un permiso o una licencia de conducción, se requerirá (señale la afirmación incorrecta):

a) En el caso de extranjeros, acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en España de, al menos, un año y haber cumplido la edad requerida.

b) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso o licencia de conducción que se posea.

c) Que haya transcurrido el plazo legalmente establecido, una vez declarada la pérdida de vigencia del permiso o licencia de conducción del que fuera titular como consecuencia de la pérdida total de los puntos asignados.

d) Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación con la clase del permiso o licencia de conducción que se solicite.

46.- El Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, prevé que deberán disponer de alumbrado interior del habitáculo:

a) Todos los automóviles.

b) Sólo los automóviles de alquiler con conductor.

c) Los automóviles destinados al servicio público de viajeros.

d) Toda máquina automotriz, agrícola o para obras, apta para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.

47.- El Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, indica, en el caso de las denuncias de carácter voluntario por hechos de la circulación:

a) La denuncia se formulará verbalmente ante los agentes de vigilancia del tráfico más próximos al lugar del hecho.

b) La denuncia se formulará por escrito ante los agentes de vigilancia del tráfico más próximos al lugar del hecho.

c) La denuncia se formulará por escrito dirigido a la Jefatura de Tráfico o a la Alcaldía del lugar de la infracción, según ostente una u otra la competencia para instruir el expediente.

d) Se harán constar en la denuncia los datos y circunstancias que se consignan en el artículo 5 del citado Reglamento.

48.- De conformidad con el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, es cierto, en cuanto a los boletines de denuncia correspondientes a denuncias de carácter obligatorio por hechos de la circulación que:

a) Se extenderán por duplicado ejemplar.

b) La firma del denunciado implica su conformidad con los hechos que motivan la denuncia, a efectos de poder acogerse a los descuentos por pronto pago y reconocimiento de su responsabilidad.

c) El denunciado puede negarse a firmar.

d) Si el denunciado no supiere firmar, el denunciante podrá suplir su firma.

49.- El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, se aplica:

a) Sólo a la inspección técnica de los vehículos matriculados en España.

b) A la inspección técnica de vehículos matriculados en España, excluidos los vehículos pertenecientes a los organismos públicos.

c) A la inspección técnica de vehículos matriculados en España, incluidos los vehículos pertenecientes a los organismos públicos.

d) A la inspección técnica de vehículos matriculados en España, incluidos los vehículos pertenecientes a los organismos públicos, únicamente cuando aquella inspección sea preceptiva.

50.- La Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, en su art. 258, determina que los inspectores urbanísticos y los policías locales que ejerzan dichas funciones:

a) Deberán solicitar la oportuna autorización judicial para entrar y permanecer en fincas, construcciones y demás lugares sujetos a su actuación inspectora, así como cuando fuera precisa la entrada en un domicilio.

b) Cuando para el ejercicio de sus funciones de inspección fuera precisa la entrada en un domicilio, se solicitará la oportuna autorización judicial.

c) Únicamente, cuando los inspectores urbanísticos no sean miembros de las Policías Locales, y fuese preciso entrar en un domicilio, será preciso solicitar la oportuna autorización judicial.

d) Siempre podrán entrar y permanecer en fincas, construcciones y demás lugares sujetos a su actuación inspectora, así como entrar en un domicilio sin necesidad de autorización judicial.